



Se extiende huachicol desde EU

(Gloria Reza y Pedro Zamora, pág. 6-9)

Funcionarios, políticos y reconocidos empresarios presuntamente estarían involucrados en el contrabando de combustible que ingresa por la frontera norte y se distribuye mediante empresas legales que supuestamente evaden al fisco alrededor de 15 mil millones de pesos al mes, según una denuncia anónima que el diputado federal Ricardo Francisco Exsome Zapata, integrante de la Comisión de Energía, recibió el 10 de febrero pasado

En el documento se detalla cómo opera una red que trafica con hidrocarburo ilegal y se describe su ruta de distribución, básicamente en Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Sonora. Conforme a estos datos, dos de cada tres pipas vendidas en el país provienen del contrabando.

Con base en este reporte, el legislador morenista informó el 18 de febrero que presentó una denuncia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a Pemex atender el problema.

Hasta el pasado 26 de marzo, cuando solicitó licencia por tiempo indefinido para contender por la alcaldía de Veracruz, Exsome no volvió a tocar el asunto públicamente. Pero este semanario investigó a las principales empresas presuntamente involucradas en la venta de combustible robado y encontró que algunas, en lugar de importarlo como tal, lo hacen pasar por hidrocarburos accesorios a fin de evadir impuestos.

En Jalisco, empresarios gasolineros de Guadalajara que cuentan con franquicias de Pemex confirmaron que les ofrecen parte del combustible que ingresa ilegalmente por Matamoros, Tamaulipas. Los reclamos por la venta ilegal se han ventilado públicamente desde hace tres años, pero a la fecha no se ha castigado a nadie.

Según la denuncia que llegó a San Lázaro, las pérdidas para Pemex por este “huachicoleo” pueden superar los 40 mil millones de pesos mensuales.

Los nexos de García Luna con el Grupo Arhe

(Ignacio Rodríguez Reyna, Miriam Ramírez y Andrés Villarreal/Ríodoce y Quinto Elemento Lab, pág. 28-31)

Un enorme diagrama de flujo muestra la compleja red de personas físicas, empresas, compañías fachada y transferencias de millones de pesos y dólares estructurada por Genaro García Luna para ocultar los recursos obtenidos “presumiblemente como sobornos por la ejecución de actos de corrupción” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.



Elaborado en diciembre de 2019 por los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el mapa detalla los vínculos y la triangulación de recursos entre al menos cinco empresas y seis personas físicas, a las que responsabiliza de haber “planeado y ejecutado un rebuscado esquema dirigido por el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública para ingresar recursos al sistema financiero nacional, para después dispersarlos en paraísos fiscales”.

En el mapa revisado por este equipo se trazan las líneas que indican el flujo de decenas de millones de pesos y dólares, la ruta de las transferencias, primero en bancos nacionales, y luego los envíos a Barbados, Curazao, Letonia, Panamá, Hong Kong y Chipre, entre otros centros off shore conocidos por su permisividad para ocultar dinero ilícito.

Con pequeños iconos, parecidos a los que se usan en los juegos de mesa como Monopoly, se representa a las empresas que participan en el entramado. Una de ellas es Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV.

Cuando los investigadores reconstruían las huellas y transacciones financieras de García Luna se toparon con el nombre de esa empresa. No sabían mucho de ella, excepto lo que podían apreciar en el diagrama: Operadora Grupo Gas Mart había depositado en dos cortos periodos de 2016 un total de 5 millones 800 mil pesos a Glac Security Consulting, firma de asesoría en seguridad creada por García Luna.

El mapa, realizado por la UIF a partir de la información de inteligencia financiera en su poder, también incluye pequeñas imágenes de personas, parecidas a los emojis de Whatsapp. Son 22 en total.

El perfil masculino más grande representa a García Luna; un par de perfiles femeninos a su hermana Esperanza y a su esposa, Linda Cristina Pereyra. Dos figuras representan a Samuel Weinberg y a su hijo Jonathan Alexis Weinberg. Y, en un lugar lateral y de tamaño más pequeño, otro perfil masculino: el de Juan José Arellano Hernández.

Juan José aparece en el mapa por dos razones: la primera, porque en julio de 2019 envió 2 millones 134 mil pesos a Samuel Weinberg, empresario dedicado a la venta de tecnología de seguridad y espionaje.

Weinberg y su hijo Jonathan Alexis son responsabilizados por la UIF de participar en un esquema organizado por García Luna con un propósito específico, según se lee en la página 26 del acuerdo para bloquear las cuentas del exfuncionario: “Triangular recursos” que con “un alto grado de probabilidad tuvieron su origen en el pago de sobornos”, mediante una red de compañías “cuyas características indican que es posible que se trate de empresas fachada, creadas para ingresar recursos al sistema financiero nacional”.



La segunda razón por la que Juan José Arellano Hernández aparece en el mapa está vinculada con sus nexos con Operadora Grupo Gas Mart, de la que su madre, María Hernández Ramos, es, mediante otra empresa, la accionista principal.

Operadora Grupo Gas Mart, una consultoría contable, fiscal, financiera y legal, es una de las más de 100 empresas del Grupo Arhe, en el que directa o indirectamente participan como socios Juan José, su hermano Érick y su madre, así como otros familiares cercanos.

Los millonarios depósitos de Operadora Grupo Gas Mart a la empresa de García Luna, que en otras circunstancias no llamarían demasiado la atención, adquirirían otro sentido en el mapa elaborado por los investigadores, que buscaban amarrar los cabos de las transacciones de las compañías de García Luna.

En un estudio compartido con el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo internacional que articula esfuerzos globales para prevenir y combatir el lavado de dinero, la UIF expuso el caso de García Luna, lo vinculó con el Cártel de Sinaloa y ubicó a Operadora Grupo Gas Mart como parte de la red.

El estudio, del que los periodistas tienen una copia, destaca que la firma, a la que identifica como “empresa 6”, está constituida en Sinaloa, “un estado de donde son originarios los principales líderes de los cárteles de la droga y cuya principal actividad radica en servicios de contaduría y asesoría”.

En la denuncia contra García Luna presentada por el titular de la UIF ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019, a la cual también tuvieron acceso Ríodoce y Quinto Elemento Lab, se hace más específico el señalamiento sobre Operadora Grupo Gas Mart:

Llama la atención que esa empresa constituida en Mazatlán, en 2012, “envíe cantidades millonarias de recursos a favor de Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad de García Luna, cuando no se vislumbra relación de negocios” entre ellas.

Por eso, concluye la UIF, es posible que Operadora Grupo Gas Mart “forme parte del esquema de triangulación planeado por Genaro García Luna a efecto de hacerse llegar recursos” a sus empresas, plan “ejecutado por diversas personas allegadas al exfuncionario federal, a través de la creación de personas morales”.

Las empresas de esta red, entre las que incluye a varias de los Weinberg, fueron fondeadas “con un alto grado de probabilidad”, enfatiza el documento, con dinero “proveniente de los sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de García Luna”, así como con recursos resultantes del “desvío de fondos de la Secretaría de Gobernación y de la Tesorería de la Federación durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto”.



Detenido en diciembre de 2019, García Luna está preso y aguarda juicio en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, acusado de haber participado en conspiraciones para traficar droga a Estados Unidos y haber protegido al Cártel de Sinaloa a cambio de decenas de millones de dólares.

En el extremo inferior izquierdo del mapa se localiza un nodo marcado por un círculo rojo, en cuyo centro los investigadores de la UIF colocaron el nombre de la empresa Nunvav Inc, y del que salen y al que ingresan líneas de varios colores.

Una de esas líneas se desplaza horizontalmente hasta el extremo derecho y conecta con el ícono que representa a Operadora Grupo Gas Mart, la del Grupo Arhe. Ese vínculo gráfico indica que hubo una transacción de decenas de millones de pesos, a la que llegaremos párrafos adelante.

Constituida en octubre de 2005 en un despacho legal dedicado a fabricar firmas de papel en Panamá, Nunvav Inc se estableció en México en 2011 y abrió cuentas en diversos bancos, en algunas de las cuales concedió a Jonathan Alexis Weinberg autorización para ejercer el control financiero de las mismas, sin que fuera accionista ni apoderado de la empresa.

Esa circunstancia llamó la atención de las autoridades. Resulta irregular, se apunta en la página 7 del acuerdo de bloqueo, ya que no “existe ninguna lógica en que una persona que no tiene injerencia alguna” en la empresa “tenga la posibilidad de realizar operaciones financieras a su nombre”, por lo que la UIF cree que los panameños que aparecen como accionistas de Nunvav “únicamente sean testaferros” de alguien cercano a Jonathan Alexis, es decir, de García Luna.

Ese mismo 2011, “de manera casi simultánea a que Nunvav Inc inició operaciones en territorio mexicano”, Jonathan Alexis y su padre constituyeron dos empresas más en el país: ICIT Private Security México, SA e ICIT Holding, SA.

El expediente armado por la UIF documenta las transferencias que Nunvav Inc hizo desde 2013 y hasta 2015 a esas dos empresas y considera que esas transacciones, de decenas de millones de pesos en conjunto, se realizaron con el propósito de triangular recursos y “enmascarar la ruta del dinero, el cual tiene un alto grado de probabilidad de provenir de actividades ilícitas”.

Un elemento es subrayado en el acuerdo del bloqueo: la relación de García Luna con los Weinberg y sus empresas. Del círculo que ocupa Nunvav en el mapa salen líneas que conectan a los Weinberg, a sus compañías y a la empresa de García Luna.

Una de ellas va directo a Operadora Grupo Gas Mart. Las autoridades han documentado que en 2013, 2016 y 2017 Nunvav Inc depositó más de 44 millones de pesos a las cuentas de la empresa del Grupo Arhe.



Del total, más de 30 millones de pesos fueron transferidos en 2016, “circunstancia que resulta inusual, pues en ese año Operadora Grupo Gas Mart envía recursos a Glac Security Consulting, la empresa de García Luna”, precisa el acuerdo de bloqueo.

El mapa tiene varios pequeños detalles. Uno de ellos es el siguiente: una línea roja sale de Operadora Grupo Gas Mart y concluye en una anotación que dice “Tarjetas prepagadas” y, a un lado, un breve texto: 2016-2019 / \$532 millones 074 mil 127 pesos.

“Es lo que hacían empresas como Soriana, Monex, en épocas electorales; compraban tarjetas prepagadas y las entregaban a los partidos. Sería un financiamiento irregular, pero ya no profundizamos en eso”, explica uno de los investigadores de la UIF.

* * *

El emoji que representa a Mauricio Weinberg muestra más nexos dentro del mapa, cuentas en bancos, transferencias hacia empresas y una línea punteada que termina en la figura que representa a García Luna.

Dedicado a la representación de empresas de tecnología de espionaje y vigilancia, Weinberg fue contratista de la Secretaría de Seguridad Pública cuando García Luna era su titular de 2006 a 2012.

“La primera operación se detecta en 2008 y es la venta de Weinberg de un software a la Secretaría de Seguridad Pública, software que después sigue siendo utilizado, no por la Secretaría, sino por una empresa particular” propiedad de los Weinberg, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en diciembre de 2019.

Después, durante el sexenio de Peña Nieto, Nunvav Inc recibió recursos de varias dependencias, incluida la Secretaría de Gobernación, y “después hay una triangulación de recursos hacia la empresa del señor García Luna, que es Glac”, detalló Nieto Castillo durante la conferencia de Andrés Manuel López Obrador.

“No sólo se trata de las triangulaciones de recursos a su empresa, sino que detectamos que esta empresa panameña (Nunvav) es la que le pagaba el modo de vida en Miami a García Luna; la pregunta es ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami?”, se cuestionó Nieto Castillo.

Y si bien la relación de Weinberg con García Luna era en un principio de proveedor y funcionario, esos términos cambiarían una vez que el exsecretario de Seguridad Pública concluyó su encargo.



Apenas cuatro días después de dejar su cargo, el exfuncionario constituyó el 4 de diciembre de 2012 en Florida la empresa GL Associates LLC, a la que Samuel Weinberg se sumó como uno de los socios estratégicos.

Meses después, García Luna se mudó a una suntuosa mansión en el exclusivo vecindario de Golden Beach, en los alrededores de Miami, cuyo costo se estima en 80 millones de dólares y cuya propiedad es del propio Weinberg, como reveló en Univisión la periodista Peniley Ramírez, quien ya había develado desde 2014 la relación de socios entre García Luna y los Weinberg.

En el expediente se destaca un hecho, al cual se ha referido varias ocasiones el presidente López Obrador cuando trata el tema de García Luna: Nunvav Inc recibió casi 3 mil millones de pesos del órgano encargado de las prisiones federales, que depende de la Secretaría de Gobernación.

A esto se refiere el acuerdo de bloqueo contra García Luna. En la página 23 dice: “Se han identificado transacciones mediante las cuales la Secretaría de Gobernación envió a Nunvav 2 mil 915 millones de pesos y 77 millones 464 mil dólares, sin una justificación aparente, enviando los capitales a cuentas existentes en paraísos fiscales”, como Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos.

Todas estas conexiones llevan a la UIF a establecer dos conclusiones:

1. “Si bien García Luna no figura como accionista o relacionado de manera directa con Nunvav, es posible que dicha moral sea la primera empresa creada para triangular millonarias transacciones de recursos que posteriormente llegarían a manos del exfuncionario federal”.
2. “La fecha de constitución de Nunvav coincide con la fecha en que se ha indicado que posiblemente García Luna recibió los primeros sobornos provenientes de cárteles de la droga”.

Hace unos meses se conoció un dato clave que respalda la hipótesis de la UIF de que detrás de Nunvav se encuentra García Luna: María Vanesa Pedraza Madrid, quien trabajó directamente con el exfuncionario en la Secretaría de Seguridad Pública y también aparece en el mapa, fue designada apoderada general de Nunvav Inc en octubre de 2019, como documentó una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

* * *

Las autoridades de inteligencia financiera no sólo reconstruyeron las transacciones de las personas y empresas que aparecen en el mapa, sino que emprendieron diferentes acciones:



El 9 de diciembre de 2019 bloquearon las cuentas de García Luna y su hermana Esperanza, de su esposa Linda Cristina Pereyra, de Mauricio Weinberg López y de Jonathan Alexis Weinberg.

El mismo 9 de diciembre de 2019 bloquearon las de Nunvav Inc, Glac Security Consulting SC, ICIT Holding SA, ICIT Private Security México SA y de Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV.

El 24 de diciembre de 2019 presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República por considerar que dichas empresas y personas realizaron presuntamente operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 27 de diciembre de 2019 se compartió el expediente de García Luna y coacusados con la agregaduría del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la embajada de ese país en México.

El 2 de enero de 2020 se dio vista a la Secretaría de la Función Pública.

El 7 de septiembre de 2020 se trasladó el expediente de García Luna, los Weinberg, las otras empresas y de Operadora Grupo Gas Mart al Servicio de Administración Tributaria.

* * *

Los autores y directivos de Ríodoce y Quinto Elemento Lab hemos buscado incorporar los puntos de vista de los hermanos Arellano Hernández sobre el contenido de este trabajo.

Tuvimos un encuentro presencial el 10 de marzo en sus oficinas localizadas en la Torre Bucks, en Mazatlán, Sinaloa, mismo que fue grabado, en el que ellos se comprometieron a entregar las respuestas a un cuestionario enviado desde el día 5 de marzo. A la fecha, no ha habido respuesta.

* * *

Operadora Grupo Gas Mart fue creada el 27 de diciembre de 2012 por Roberto Osuna Rubio, uno de los principales socios de los Arellano Hernández, junto con Consultores en Opciones de Negocios SC de RL, empresa en la que María Hernández Ramos, madre de Juan José y Erick, tiene 90% de las acciones.

De 2013 a la fecha, María Hernández Ramos ha compartido la propiedad de la empresa con su hermano David y su cuñado José Patrón Millán, otro de los nombres que recurrentemente aparecen en las decenas de empresas creadas por los Arellano.



La empresa sinaloense vinculada con el manejo de recursos de y hacia García Luna ha sufrido las transformaciones legales que son la marca de la casa: desde que fue creada en Mazatlán, Operadora Grupo Gas Mart ha cambiado su razón social en varias ocasiones y una parte de ella fue escindida para dar origen a una nueva empresa.

Gas Mart nació con la razón social Canadá Resort S de RL de CV. Después de participar en las transacciones relacionadas con García Luna, en enero de 2020, cambió de nuevo su razón social a Canada R Servicios de Operación SA de CV, nombre que lleva actualmente.

* * *

Los investigadores de la UIF han encontrado un par de señales más de los vínculos de Nunvav Inc y García Luna en los que se cruza el Grupo Arhe.

Una de ellas les llamó la atención: que en agosto de 2017 Jonathan Alexis Weinberg solicitara ante un notario público oficializar una operación de compraventa de una residencia en Cancún. Se desconoce la causa de que sea así, destacan, “ya que no tiene la calidad de comprador o vendedor”.

Ubicada en Paseo Pok Ta Pok 118, la casa costó 950 mil dólares y la parte compradora fue la Inmobiliaria Damari SA de CV, una más de las empresas de Grupo Arhe.

Jonathan Alexis apareció de nuevo entre las miles de transacciones financieras examinadas. Ahora, con operaciones no especificadas en el documento con Antonio Leyva Domínguez, apoderado de Aero Taxis de Sinaloa, otra de las empresas del Grupo Arhe.

Leyva Domínguez es socio, representante o apoderado de muchas más empresas del grupo. Arti Administración y Bienes SAPI de CV es una de las más recientes, en donde el presidente y el secretario del Consejo de Administración son, respectivamente, dos nombres conocidos: Juan José y Erick Ernesto.

Sí, los hermanos Arellano, los que siguen en la mira de las autoridades.

Un país convertido en campo de refugiados

(Irene Savio, pág. 54-56)

Bihac, Bosnia.- En el cementerio de esta ciudad, en el extremo noroccidental de Bosnia, tragedias de ayer y de hoy com-parten el paisaje a pocos metros de distancia. En un rincón están los muertos más antiguos, los que perdieron la vida en una de las guerras más cruentas del siglo XX, el conflicto que sacudió este país de 1992-1995, surgido por la desintegración de Yugoslavia.



Poco más allá, en un área nueva, rodeada de hierbas y rocas blancuzcas, yacen unos bultos de tierra fresca, enzarzados con unos palos verdes, que esconden tumbas de migrantes fallecidos en 2019 y 2020, muchos de ellos de identidad desconocida.

Es marzo de 2021 y la brecha entre dos mundos ha convertido a Bosnia –último país de la geografía antes de llegar a suelo croata y de la Unión Europea– en el escenario imposible de una crisis humanitaria. Aquí, en esta frontera exterior del club europeo, está una de las últimas rutas entreabiertas para los migrantes que huyen por hambre o persecución y sueñan con alcanzar un lugar seguro en el corazón de Europa. Un camino que las autoridades europeas han intentado blindar, en medio de críticas de ONG y organizaciones humanitarias que denuncian violaciones a los derechos humanos.

No siempre fue así. Hasta hace cuatro años Bosnia, país expulsor él mismo de jóvenes que escapan de la corrupción y falta de empleo, no formaba parte del tablero de las rutas hacia la Unión Europea (UE). Pero el bloqueo de otros caminos, la persistente inestabilidad de países de Medio Oriente y África, y la decisión el año pasado de Grecia de endurecer sus procedimientos para obtener el estatus de asilo, han coincidido con un goteo que la pandemia sólo en parte ha frenado y que ha dejado a muchos –10 mil, según una estimación– atrapados en Bosnia. Así, poco a poco las tragedias están saliendo a la luz, sin que se vean soluciones de largo plazo.

“Una de las primeras tumbas, de 2019, la pagó un grupo de ciudadanos de la zona. Después murieron más”, cuenta Hajrudin Halilovic, médico del hospital de Bihac. “Hacemos lo que podemos, pero nuestra capacidad es limitada”, aclara, al explicar que no fue posible identificar algunos fallecidos porque no llevaban documentos y nadie reclamó sus cuerpos.

Por ello en algunas tumbas han escrito sólo el lugar donde el cadáver fue encontrado y “NN Lice”, persona no identificada. Nermin Kljajic, consejero de Interior de Una Sana, el cantón al que pertenece Bihac, se agita y habla más rápidamente cuando se toca el tema. “Todavía no nos recuperamos de la guerra de 1992-1995 y en los últimos tres años han llegado aquí unos 100 mil migrantes” (70 mil según la ONU), dice.